

REVISTA DE DERECHO

AÑO XXVIII - JULIO - SEPTIEMBRE DE 1960 - N.º 113

DIRECTOR: MARIO CERDA M.

CONSEJO CONSULTIVO:

HUMBERTO ENRIQUEZ FRODDEN
ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA
JUAN BIANCHI BIANCHI
QUINTILIANO MONSALVE JARA
MARIO CERDA MEDINA
ESTEBAN ITURRA PACHECO



ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA - CONCEPCION (CHILE)

CORTE SUPREMA

LUIS MARIO ORTIZ

CON RAMON VASQUEZ CARVAJAL

**NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA-
VENTA Y RESOLUCION DEL MISMO**

Casación en la Forma y Fondo.

**ACCION DE NULIDAD — TERMINACION DE MANDATO — OBLIGA-
CIONES ALTERNATIVAS — EMANCIPACION DEL REPRESENTADO —
RESOLUCION DEL CONTRATO.**

DOCTRINA.— La acción de nulidad compete a quien enajena la cosa, pero no a quien conserva su dominio y a quien la enajenación no empece por no hallarse legalmente representada por un mandatario al celebrarse el contrato de compra venta. Si bien es cierto que entre las causales de terminación del mandato que señala el artículo 2163 del Código Civil no se encuentra la que proviene de la emancipación del menor producida por el hecho de su matrimonio, no lo es menos que

dicha emancipación hace caducar los mandatos que el padre o madre haya otorgado en su representación.

No puede prosperar la acción de resolución de contrato de compraventa por no pago del precio puesta en ejercicio por un solo comunero, si se trata de una obligación alternativa en que la acción corresponde a los acreedores y el actor no concurrió legalmente a la venta y a quien por consiguiente no le empece.

Santiago, dieciseis de Septiembre de mil novecientos sesenta.

Vistos:

Luis Mario Ortiz, formaliza a fojas 105 recurso de casación en la forma contra la sentencia de nueve de Marzo último, expedida por una de las Salas de la Corte de Valparaíso, que, confirmando la de primera instancia, negó a la demanda deducida por Ortiz en que pedía la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre los condueños del inmueble ubicado en Viña del Mar calle 3 Norte N.º 353, y Ramón Vásquez, y subsidiariamente la resolución del contrato y más subsidiariamente aún, el pago del predio insoluto, ascendente a \$ 2.039.060.

Fundar su recurso en las siguientes causales:

1.ª Causal.—La 9.ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el N.º 7.º del artículo 800 y 5.º del artículo 795 del mismo cuerpo de leyes, esto es, la falta de citación para una diligencia de prueba que la hace consistir en la falta de citación del demandado Vásquez a la absolución de las posiciones puestas a las demandadas Luciano Barnier y Elena Vera v. de Barnier.

2.ª Causal.—La misma del N.º 9 del artículo 768 citado, y fundándola, dice el recurrente, que en segunda instancia no se oyó al Ministerio Público, como lo prescriben los N.ºs 4.º y 6.º del artículo 357 del Código Orgánico de Tribunales, causal que autoriza, el recurso en relación con el artículo 366 del mismo cuerpo legal, dado que es el caso típico previsto en el N.º 2.º de esta última norma jurídica.

3.ª Causal.—La del N.º 5.º del artículo 769 referido, en relación con el N.º 4.º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, esto es la falta en el fallo de fundamento de hecho y de derecho en que debe apoyarse; Fundando esta causal, dice el recurrente, que las posiciones de fojas 101 dieron por absueltas en rebeldía de Elena Vera v. de Barnier y de Luciano Barnier, y entre las preguntas formuladas en forma asertiva están las que el último tuvo conocimiento con Luz Angélica Barnier, y por lo tanto que terminó la patria potestad de la primera sobre ésta con dicho matrimonio; y la de que Barnier le entregó al demandado Vásquez el inmueble vendido, pero la sentencia impugnada no ponderó este medio de prueba, sino que se concretó a decir que los hechos

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

185

confesados no alteraban las conclusiones del fallo apelado hecho que por lo demás no era efectivo: Contra el mismo fallo se recurre de casación en el fondo por las infracciones de los preceptos del Código Civil que pasan a indicarse con los fundamentos respectivos.

Infracción del artículo 137.— Al fundar esta transgresión el recurrente dice: que el 16 de Marzo de 1955 doña Elena Vera viudad de Barnier le confirió poder a don Luciano Barnier para que vendiera la propiedad ubicada en la calle 3 Norte N.º 353 de Viña del Mar que, junto con otras personas, era dueña la menor Luz Barnier de Ortiz, hija de la señora Vera, que el 30 de Septiembre del mismo año el recurrente contrajo matrimonio con dicha menor, terminando la patria potestad a que esta persona estaba sometida, para pasar a quedar bajo la potestad marital de él, y por consiguiente caducado el mandato, que sin embargo el mandatario Barnier el nueve de Noviembre siguiente, usando el mandato referido, vendió el inmueble, venta que es nula porque se prescindió de su autorización marital, que los sentenciadores infringieron el artículo 137 citado al hacer suyo el párrafo pertinente del fundamento 4.º de

la sentencia de primera instancia, que dice textualmente: "El matrimonio posterior de la menor llevado a cabo el 30 de Septiembre de 1955, no tiene el efecto, como cree verlo el demandante de invalidar o hace caducar un acto válidamente efectuado con anterioridad; y que esta infracción influyó substancialmente en lo dispositivo del fallo, porque no se dio lugar a la demanda en virtud de que los falladores tuvieron en vista la vigencia del mandato otorgado con anterioridad al matrimonio con prescindencia de la autorización matrimonial para la celebración de la compraventa.

Infracción de los artículos 1681 y 1682.—Expresa el recurso que estas disposiciones establecen la nulidad relativa del contrato aludido, porque el marido no dio su consentimiento para celebrarlo, que sin embargo el fundamento N.º 3.º de la sentencia de primera instancia, aceptado por la de segunda, sostiene que al otorgarse el mandato la madre tenía la patria potestad sobre su hija, situación jurídica que existía cuando se concedió la autorización judicial para que se pudiera vender el inmueble por parte de la menor circunstancia que les sirvió a los sentenciadores para llegar a la conclusión que la venta era válida, violándose así los re-

feridos artículos 1681 y 1682 citados, transgresiones que influyeron en lo dispositivo de la sentencia impugnada, en razón de que el fundamento 15 del fallo del juez a quo, que hizo suyo el de alzada dijo: "Que en consecuencia, procede rechazar el primer capítulo de la demanda". Infracción del artículo 1754. Con respecto a esta transgresión dice el recurrente que estando la menor bajo potestad marital no podía realizarse la compra-venta sin previo decreto judicial con conocimiento de causa, antecedente que se invocó en la demanda y que el fallo omitió estudiar; y que la infracción se cometió porque se estimó suficiente el mandato en la celebración del contrato, influyendo esto en lo dispositivo de la sentencia impugnada tal como acababa de expresarse en la transgresión de los artículos 1681 y 1682 ya referidos; Información del artículo 1684.

Sostuvo el recurso que los jueces del fondo al aceptar el fundamento 29 del fallo impugnado, que establece que el recurrente careció de derechos al ejecutar sus acciones infringió el inciso 2.º de aquel precepto, porque la incapacidad de la mujer casada que ha obrado sin autorización del marido o del Juez en subsidio se entiende establecida también a

favor del marido; que se infringió también la disposición aludida, puesto que, se le privó del ejercicio de una acción que la ley le concede, transgresión que ha influido substancialmente en lo resolutivo del fallo, porque se rechazó la demanda por considerarse al recurrente un extraño al juicio; Infracción de los artículos 1725 N.º 1.º, 1749, 1750 y 1752.

Expresa el recurrente que estas disposiciones establecen que son bienes sociales los dineros que se devenguen dentro del matrimonio, sea de bienes de la sociedad conyugal o de los cónyuges todo lo cual ingresa al haber de la sociedad conyugal que administra el marido que es el dueño ante terceros, que los falladores al aceptar los fundamentos 28, 29, 30 y 31 de la sentencia recurrida, en que se razona como si no existieran los preceptos legales últimamente citados, transgredieron tales preceptos, puesto que se le desconoció la facultad de demandar por si mismo; que la violación de las referidas normas legales han influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, dado que se rechazó la demanda en todas sus partes porque se estimó que carecía de acción personal. Agrega que estas infracciones están íntimamente ligadas con la del artículo 135,

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

187

que expresa que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges y toma el marido la administración de los de la mujer; que los jueces de la instancia al expresar en el fundamento 31.º que el demandado no incluyó en su defensa la improcedencia de las acciones subsidiarias, por carecer el demandante de derecho a accionar, introdujeron a la litis una materia extraña que vició el fallo en la forma y también en el fondo, puesto que infringieron las disposiciones legales citadas; y que las transgresiones influyeron en lo dispositivo de la sentencia, porque rechazaron la demanda en todas sus partes, Infracción de los artículos 686 en relación con el artículo 1700 y con el artículo 384 N.º 2.º del Código de Procedimiento Civil.

Estas infracciones dice el recurrente que se han producido en relación con la petición de la demandada de resolución del contrato de compraventa, fundada en que el demandado Vásquez no pagó el saldo de precio dentro de noventa días contados desde la entrega del inmueble; que los sentenciadores dieron por establecido que no probó que hubiese existido la tradición de la propiedad vendida, siendo que fue inscrita la transferencia en el Conserva-

dor de Bienes Raíces y la entrega material no se llevó a cabo por no haber querido el comprador, según lo declarado, por cuatro testigos, que depusieron al efecto; y que se violaron aquellas disposiciones al rechazar el instrumento público que acredita la transferencia, y las reglas reguladoras de la prueba al no aceptar aquellos testimonios. Agrega el recurrente que si hubiese aplicado correctamente el artículo 1489 del Código Civil, que concede la acción resolutoria, se habría aceptado la primera petición subsidiaria de la demanda, y al no haberse hecho así las infracciones que hace notar al respecto influyeron en lo dispositivo del fallo.

Infracción de los artículos 394, 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil. Fundando estas transgresiones el recurrente expresa: que conforme a este precepto se dieron por absueltas las posiciones puestas a los demandados Luciano Barner y Elena Vera viuda de Barnier, y por confesos a éstos sobre los siguientes hechos: a) Que no dio su consentimiento para la celebración del contrato; b) Que cuando éste se celebró había caducado el mandato tantas veces referido; c) Que, cuando Barnier

actuó, no tenía poder de su esposa por haber ésta contraído matrimonio, hecho reconocido por el mandatario y d) Que éste desocupó el inmueble y el demandado Vásquez no quiso tomar posesión de él que, sin embargo, los jueces del fondo expresaron que las posiciones no habían alterado las conclusiones a que arribó el fallo apelado, con lo cual, violaron los preceptos antes citados y las leyes reguladoras de la prueba, violaciones que influyeron substancialmente en los dispositivos del fallo, puesto que con las posiciones dadas por absueltas se probaron plenamente los hechos relacionados en las letras referidas, debiendo entonces haberse dado lugar a la resolución de la compraventa porque los vendedores cumplieron con sus obligaciones y el comprador no cumplió la de pagar el precio.

Infracción de los artículos 2116 inciso 1.º, 2160 y 2173. Dice el recurso que en la segunda parte del fundamento 13 y en su parte final, los sentenciadores estudiaron la situación jurídica producidas entre el mandatario y el comprador del predio, sin preocuparse de los mandantes que son los obligados, estimando así que no se invocó elemento alguno que pudiera traer consigo la nulidad invocada, con lo cual transgre-

dieron los preceptos que se dan por violados, y que las transgresiones influyeron en lo dispositivo de la sentencia, porque se rechazó la petición principal de la demanda y se estimó válido el contrato.

Se trajeron los autos en relación sobre ambos recursos. Teniendo presente en cuanto al recurso de casación en la forma:

1.º) Que la primera causal invocada, esto es, la prescrita en el N.º 9.º del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el N.º 7.º del artículo 800 y N.º 5.º del artículo 795 del mismo cuerpo de leyes, se hace consistir, en el recurso en que el demandado Ramón Vásquez no fue notificado de las resoluciones que llamaron a los demandados Luciano Barnier y Elena Vera viuda de Barnier a absolver las posiciones que el demandante le puso a estos litigantes, y debe ser rechazada, entre otras razones, porque el recurrente no es parte agraviada, sino que sería el referido Vásquez.

2.º) Que la segunda causal de casación en la forma invocada, la misma del N.º 9.º del artículo 768 citado, se funda en que la segunda instancia no se oyó al Ministerio Público, como lo prescriben

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

189

los N.os 4.º y 5.º del artículo 357 del Código Orgánico de Tribunales en relación con el N.º 2.º del artículo 366 de este cuerpo legal.

3.º) Que esos N.os 4.º y 6.º disponen, respectivamente, que debe oírse al Ministerio Público en los juicios sobre estado civil de alguna persona y en general en todo negocio respecto del cual las leyes prescriben expresamente su audiencia o intervención, y en el presente juicio no se discute el estado civil de alguien, ni existe ley que exija la audiencia o intervención de dicho Ministerio, por lo cual las disposiciones invocadas no son procedentes como generadoras de la causal.

4.º) Que en N.º 2.º del artículo 366 dispone que se oye al Ministerio de los Defensores Públicos en los actos de los incapaces o de sus representantes legales, y de los curadores de bienes para los cuales actos exija la ley autorización o aprobación judicial. En el presente juicio el demandante Mario Ortiz ha comparecido por sí y no como representante legal de su mujer, ni tampoco puede sostenerse que hubiese tenido que intervenir en alguna forma el Ministerio de los Defensores Públicos en la iniciación

o prosecución del presente juicio de donde se infiere que no es aceptable hacer valer la pretendida infracción del precepto que se estudia como fundamento de la causal invocada.

5.º) Que a mayor abundamiento, en el evento de que los preceptos legales que se estudian ordenaran el dictamen del Ministerio Público en este litigio, siempre habría que rechazar la causal, dado que la falta del trámite no aparece en ley alguna penada con nulidad.

6.º) Que la 3.ª y última causal de casación en la forma la del N.º 5.º del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con el N.º 4.º del artículo 170 de este cuerpo legal, se hace consistir en que los sentenciadores no ponderaron los hechos afirmativos que se dieron por confesadas por los demandados Elena Vera viuda de Barnier y Luciano Barnier, y que se refieren al conocimiento que éste último tuvo del matrimonio del recurrente con la menor Angélica Barnier el mismo día en que se celebró la ceremonia, y que por lo tanto supo que había terminado la patria potestad que sobre dicha menor tenía su madre señora Vera viuda de Barnier, ni

ponderaron el hecho de que Barnier le hizo entrega material al demandado Vásquez del inmueble vendido por medio de la escritura cuya nulidad se pide en la demanda;

7.º) Que es efectivo lo expuesto por el recurrente en cuanto a que los jueces de la instancia no ponderaron la prueba confesional aludida. Sin embargo no debe aceptarse la causal que se alega, porque el vicio no ha influido en lo dispositivo del fallo, como se demostrara al estudiarse el recurso de casación en el fondo que también se ha formalizado; y

8.º) Que, como consecuencia de todo lo expuesto deben rechazarse las causales de casación en la forma formalizado contra la sentencia recurrida; Teniendo presente en cuanto al recurso de casación en el fondo;

9.º) Que, en atención al número considerable de disposiciones legales que el recurso da infringidas, y a las múltiples y variadas alegaciones que se hacen valer para demostrar las transgresiones, es necesario estudiar las acciones deducidas en la demanda y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyan a fin de determinar si dichas acciones son o no procedentes.

Obtenido el resultado correspondiente se hará más viable dilucidar acerca de las presuntas infracciones;

10) Que, por la demanda de fojas 9 el demandante Luis Mario Ortiz demandó a Ramón Vásquez, comprador de la propiedad ubicada en Viña del Mar, calle 3 Norte N.º 353, a fin de que se declarara 1.º) Nulo, de nulidad relativa, el contrato de 9 de Noviembre de 1945, corriente a fojas 3 por el cual los comuneros de aquel inmueble se lo vendieron al citado Vásquez; 2.º) En subsidio, resuelto el contrato por falta de pago del precio, y 3.º) Subsidiariamente aún, se condenará al comprador a pagar el saldo de precio del inmueble, ascendente a \$ 2.039.060.

El actor dedujo la acción tanto contra Vásquez como también contra todos los comuneros del predio, y fundó la acción principal de su demanda en los siguientes términos: Luciano Barnier uno de los comuneros de la propiedad, obtuvo poder de los otros comuneros para realizar la venta entre éstos se encontraba la menor Luz Angélica Barnier, representada por su madre Elena Vera viuda de Barnier, en virtud de éstas, aquella sometida a la patria potestad de ésta; más

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

191

tarde la menor contrajo matrimonio con el actor, y a pesar de esta circunstancia, Luciano Barnier concurrió al contrato en nombre de Luz Angélica, usando del mandato fenecido a su respecto; Agregó el demandante que la compraventa es nula, de nulidad relativa, porque el mandato, con relación a su cónyuge, habrá caducado con el matrimonio por haber terminado la patria potestad y pasando él a ser el representante legal de aquélla; y porque no concurrió al otorgamiento del contrato ni autorizó la venta;

11.º) Que el fundamento 2.º del fallo de primera instancia, que el recurrido hizo suyo dió por establecidos los siguientes hechos: el 16 de Marzo de 1955 Elena Vera viuda de Barnier, en representación de su hija Luz Angélica Barnier Vera, sometida a su patria potestad, le confirió poder a Luciano Barnier para que vendiera el inmueble de Viña del Mar; el 30 de Septiembre del mismo año la menor contrajo matrimonio con el demandante Luis Ortiz, el 9 de Noviembre siguiente Barnier por sí y como mandatario de Luz Angélica y demás condueños del predio vendió el inmueble al demandado Vásquez; y por último la compraventa no

fue autorizada por el demandante Ortiz, quien tampoco concurrió a su otorgamiento;

12.º) Que si bien es cierto que entre las causales de terminación del mandato que señala el artículo 2163 del Código Civil no se encuentra la que proviene de la emancipación del menor producida por el hecho de su matrimonio, no lo es menos que dicha emancipación hace caducar los mandatos que el padre o madre haya otorgado en su representación, en virtud de las siguientes razones: a) Porque el mandato nace a la vida del derecho con ocasión del ejercicio de la patria potestad, terminada ésta debe también terminar aquel, dado que dejó de existir la fuente que le dio existencia Legal; b) Porque la vigencia del mandato impide que el emancipado entre en posesión de sus derechos civiles en toda su integridad, puesto que el mandatario podría ejecutar actos que obligaron al demandante lo cual iría naturalmente en desmedro de tales derechos; y c) Porque en el caso del matrimonio de una menor de edad, la potestad marital, que es el conjunto de derechos que las leyes le conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer, quedaría menoscabada con la vigencia de

mandatos otorgados por su padre o madre en su representación;

13) Que caducado el 30 de Septiembre de 1955 el mandato que Elena Vera viuda de Barnier le confirió a Luciano Barnier en representación de la cónyuge del actor, en virtud del matrimonio celebrado en aquella fecha, el contrato de compraventa otorgado el 9 de Noviembre siguiente, al cual concurrió Barnier como mandatario de la expresada cónyuge, con un mandato fenecido, no pudo obligar a ésta ni a su marido, o en otros términos no le empece a éstos aquél contrato y consecuentemente, Luz Angélica Barnier no ha enajenado su cuota en la propiedad raíz tantas veces aludida, y conserva todos sus derechos en ésta;

1.º) Que esta situación jurídica es irreconciliable con el ejercicio de la acción de nulidad deducida en la demanda, porque la cónyuge del demandante no fue vendedora de su cuota en el inmueble, sino que actualmente es dueña. La acción de nulidad del contrato de compraventa corresponde a aquellos que verdaderamente enajenaron la cosa, pero no a los que conservan su dominio; como ocurre en la especie;

15) Que el recurso considera que por haber los jueces del fondo rechazado la acción de nulidad, transgredieron los artículos 1681, 1682, 1754, 1684 inciso 2.º, 1725 N.º 2.º, 1749, 1750, 1752, 2116 inciso 1.º, 2160 y 2173 del Código Civil, pero en realidad los sentenciadores no han infringido estos preceptos legales, toda vez que ninguno de estos le concede al lector aquella acción. Es inoficioso, de consiguiente, entrar a contemplar particularmente cada una de las referidas disposiciones, aún en el supuesto de que alguna haya sido mal aplicada, dado que la posible torcida aplicación no habría influido substancialmente en lo dispositivo del fallo; ,

16) Que por la primera petición subsidiaria de la demanda el actor pide la resolución del contrato de compraventa por falta de pago del saldo de precio, acción que tampoco puede prosperar, como pasa a demostrarse. Es un hecho de la causa sentado en la sentencia recurrida, y sobre el cual las partes han estado de acuerdo durante la secuela del juicio, que doce personas dueñas en común de la propiedad en referencia, la vendieron de consumo al demandado Vásquez.

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

193

Como sólo el demandante, considerándose vendedor, ha pedido la resolución del contrato, la acción es improcedente. En efecto, la falta de pago del precio por parte del comprador de un inmueble, le concede al vendedor dos acciones: exigir la resolución del contrato o pedir su cumplimiento.

Así lo establecen los artículos 1489, 1873 y 1878 del Código Civil. Se trata de una obligación alternativa, dado que estos preceptos le conceden al vendedor dos derechos que ejercitado uno desaparece el otro. Por consiguiente el comprador tiene dos obligaciones correlativas a esos derechos.

Según el N.º 6.º del artículo 1526 de aquel cuerpo de leyes cuando la obligación es alternativa y la elección es de los acreedores, todos deben obrar de consuno.

Este es el caso de autos en que todos los condueños de la propiedad de Viña del Mar, concurrieron a la venta con excepción de Luz Angélica Barnier según se ha expresado ya. Como la demanda no ha sido entablada por todos los comuneros que concurrieron a la suscripción de la escritura de compraventa, la acción resolutoria deducida no puede prosperar,

17) Que lo dicho en el fundamento 14) de esta sentencia es aplicable al ejercicio de la acción subsidiaria que se estudia razonamiento que también hace procedente esta acción.

18) Que lo expuesto en los dos acápite que preceden se infiere que es inoficioso contemplar particularmente las presuntas infracciones de los artículos 686, 1700 y 1713 del Código Civil y 384 N.º 2.º, 394, 399 y 400 del de Procedimiento Civil, dado que en el evento de que se hubiesen transgredidos, las contraversiones no habrían influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada;

19) Que con relación a la segunda acción subsidiaria de la demanda, o sea en cuanto al cobro del saldo insoluto del precio de venta, ella no puede prosperar, tanto, porque el demandante no puede exigir por sí solo todo lo adecuado por el demandado Vásquez, cuanto porque, como se ha expresado ya, la cónyuge de aquel no ha enajenado su cuota en el inmueble tantas veces referido.

Las infracciones de los artículos 394, 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil y 1713 del Código Civil que hace valer

también el recurrente en cuanto los sentenciadores no dieron por probado el hecho de que el comprador Vásquez no estaba en mora de pagar el referido saldo de precio de la propiedad comprada, en caso de existir tales transgresiones no han podido influir substancialmente en lo dispositivo del fallo en razón de lo expresado en el párrafo que precede.

A mayor abundamiento, el recurso no ha hecho mención expresa y determinada de cómo se produjeron las contravenciones ni como habrían influido en el resolutivo de la sentencia impugnada, de un modo substancial. Visto además lo prescrito en los artículos 768, 772, 787 y 809 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo, formulados contra la sentencia de nueve de Marzo último, escrita a fojas 101, con costas en que se condena solidariamente a la parte que los interpuso y al abogado que aceptó el patrocinio.

Aplicuese a beneficio fiscal la cantidad consignada de que da fe la boleta de fojas 103.

Ofíciase.

Anótese, páguese el impuesto y devuélvanse.

Redacción del Ministro don Miguel González Castillo.

Publíquese. Pedro Silva F. — Osvaldo Illanes Benítez — Ramiro Méndez B. — M. González C. — Enrique Urrutia M. — Darío Benavente G. — Alfredo del Valle V.

Pronunciada por los Ministros titulares de la Excma. Corte Suprema señores Pedro Silva Fernández — Osvaldo Illanes Benítez — Ramiro Méndez Brañas — José Miguel González Castillo — Enrique Urrutia Manzano y Abogados Integrantes señores Darío Benaventes Gorroño y Alfredo del Valle Valenzuela.

Aníbal Muñoz A., Secretario.